

Art. 6.º Las pruebas constarán de dos partes:

1.ª De carácter general, encaminada a comprobar la posesión de la cultura básica suficiente y a ponderar la capacidad de razonamiento del alumno.

2.ª Específica de aptitud física.

Art. 7.º La prueba de carácter general constará de dos ejercicios.

1. Primer ejercicio: Redacción, durante un tiempo máximo de hora y media, de un tema de carácter general que previamente habrá sido desarrollado por un miembro del Tribunal, en un máximo de cuarenta minutos, y durante cuya explicación se podrán tomar notas.

Segundo ejercicio: Constará de dos partes:

Primera parte: Desarrollo por escrito, durante hora y media en total, de una cuestión de lengua española y otra cuestión de filosofía, elegidas por el alumno entre las dos que le hayan sido propuestas por el Tribunal para cada una de las materias.

Los alumnos que hayan realizado el Curso de Orientación Universitaria conforme a los planes de estudios anteriores al implantado en el curso 1978-79, realizarán las pruebas de esta primera parte, en cuanto a su contenido, de acuerdo con las materias comunes que hubieran seguido en la programación del respectivo Curso de Orientación Universitaria.

Segunda parte: Consistirá en el desarrollo por escrito de dos cuestiones correspondientes a dos de las materias, obtenidas por sorteo, de la opción elegida por el alumno. Estas materias serán elegidas, necesariamente, una entre las obligatorias de la opción y otra entre las optativas.

El alumno elegirá las cuestiones que ha de desarrollar entre las dos que le hayan sido propuestas por cada una de las mencionadas materias.

Los alumnos acogidos a planes del Curso de Orientación Universitaria anteriores al implantado en el curso 1978-79 elegirán sus materias de acuerdo con lo establecido en el sistema aplicado a las materias optativas cursadas conforme a dichos planes.

La duración de esta segunda parte será de hora y media. En el caso de que una de las materias fuera de dibujo técnico, el Tribunal podrá acordar una duración mayor del ejercicio correspondiente a esta materia, teniendo en cuenta sus peculiaridades.

2. Quedarán exentos de realizar esta prueba de carácter general:

— Los alumnos que hayan superado las pruebas de aptitud para acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universitarios.

— Los que acrediten estudios que tengan reconocido el acceso directo a los Centros universitarios anteriormente citados.

— Los que tengan aprobadas las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años.

Para los alumnos que se acojan a lo previsto en el párrafo anterior, la calificación de la prueba de carácter general será tomada de la calificación definitiva de las pruebas de aptitud para acceso a la Universidad o, en su caso, de la nota media de COU, realizado en cursos anteriores al de 1974-75.

Para quienes, teniendo reconocido acceso directo a la Universidad, no puedan acreditar una calificación numérica, se les aplicará la puntuación general de 5,5 puntos.

Art. 8.º Las pruebas de carácter general, de acceso para los alumnos que hayan cursado estudios convalidables con el Bachiller español y Curso de Orientación Universitaria, en el extranjero o Centros docentes extranjeros establecidos en España, serán las mismas que las establecidas en el artículo anterior, salvo la segunda parte del segundo ejercicio, que versará sobre el desarrollo por escrito de dos cuestiones correspondientes a dos materias de uno de los siguientes grupos:

A) Física, Matemáticas, Química, Biología y Geología.

B) Filosofía, Literatura, Latín, Griego, Historia del mundo contemporáneo y Geografía económica.

El alumno, antes de comenzar el ejercicio, elegirá dos materias del grupo por el que opte. El contenido de estas materias se acomodará a los planes y programas del Curso de Orientación Universitaria vigente.

Art. 9.º Las pruebas de aptitud física tenderán a evaluar la capacidad y condición física del alumno y tendrán por objeto la superación de un conjunto de ejercicios, propuestos por el Tribunal, para valorar las cualidades físicas fundamentales de coordinación motriz, agilidad, potencia y resistencia y adaptación al medio acuático.

Art. 10. 1. Cada uno de los ejercicios, tanto de la prueba general como de la específica, serán calificados con una puntuación de cero a diez puntos.

2. Las calificaciones de los ejercicios de la prueba de carácter general se computarán con el promedio de las calificaciones globales del alumno en los cursos de Bachillerato Superior y en el Curso de Orientación Universitaria, o de los estudios equivalentes que presentarán los interesados. No se computarán las calificaciones correspondientes a los cursos convalidados.

3. En ningún caso podrá ser declarado apto el alumno que no haya conseguido en cada una de las pruebas un promedio de cuatro puntos. Para ser declarado apto, la media de las pruebas general y específica deberá ser igual o superior a cinco.

Art. 11. La admisión definitiva del alumno quedará condicionada en todo caso a la superación del reconocimiento médico que se realizará en los respectivos Centros y a la capacidad máxima de admisión de alumnado previamente establecida por el Centro, de acuerdo con sus posibilidades de impartir docencia a los alumnos de nuevo ingreso.

En el caso de que el número de alumnos declarados aptos en estas pruebas rebase la capacidad máxima de admisión del alumnado, previamente fijada en cada Centro, las plazas serán cubiertas por el orden de puntuación obtenido en las mismas.

Art. 12. Las puntuaciones obtenidas por los alumnos se harán públicas en los tableros de anuncios de los Centros.

Art. 13. Queda derogada la Orden ministerial de 16 de julio de 1981 sobre pruebas de aptitud para ingreso en los Institutos Nacionales de Educación Física.

Art. 14. Queda autorizada la Dirección General de Ordenación Universitaria y Profesorado para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo e interpretación de la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 29 de octubre de 1982.

MAYOR ZARAGOZA

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profesorado.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

29184

REAL DECRETO 2896/1982, de 27 de agosto, por el que se declara la urgente ocupación de bienes y derechos, al objeto de imponer la servidumbre de paso para construir una variación del trazado de la línea de transporte de energía eléctrica a 66 KV de tensión, «Sabón-San Pedro de Visma II», entre sus apoyos números 4 al 14 bis, cuyo recorrido afecta a la provincia de La Coruña, por la Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.» (FENOSA).

La Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima» (FENOSA), ha solicitado del Ministerio de Industria y Energía la concesión de los beneficios de expropiación forzosa e imposición de la servidumbre de paso y la declaración de urgente ocupación, con la finalidad de variar el trazado de la línea de transporte de energía eléctrica, doble circuito a sesenta y seis kilovatios de tensión «Sabón-San Pedro de Visma II», entre sus apoyos números cuatro al catorce bis, cuyo recorrido afecta a la provincia de La Coruña.

La solicitud ha sido hecha en base a lo dispuesto en el artículo treinta y uno del Reglamento que desarrolla la Ley diez de mil novecientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo, de Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas.

La citada instalación fue declarada de utilidad pública, en concreto, por resolución del Servicio Territorial de La Coruña de fecha once de junio de mil novecientos ochenta y uno, y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y uno, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso aéreo.

Se estima justificada la urgente ocupación por ser imprescindible la construcción de la variación de la línea proyectada para la continuidad del funcionamiento de la línea «Sabón-San Pedro de Visma II», a través de la cual recibe actualmente energía «Compañía Refinadora de Petróleos, S. A.» (PETROLIBER), y además, para poder disponer del tramo sustituido que pasará a formar parte de la segunda alimentación de energía eléctrica a dicha factoría directamente desde «Sabón» proporcionando a la misma la energía precisa para poner en funcionamiento sus recientes ampliaciones de inmediata puesta en servicio.

Tramitado el correspondiente expediente por el Servicio Territorial de La Coruña, de acuerdo con la Ley diez de mil novecientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo, y su Reglamento de aplicación aprobado por Decreto dos mil seiscientos diecinueve de mil novecientos sesenta y seis, de veinte de octubre, se presentaron, dentro del período hábil reglamentario en que fue sometido al trámite de información pública, dos escritos de alegaciones, uno de subsanación de errores en la titularidad de una de las fincas afectadas, que ha sido atendido, y el otro, de petición de variación de trazado que no puede ser aceptado por no estar fundamentado en las circunstancias que para ello se determina en el artículo veintiséis del anteriormente citado Decreto dos mil seiscientos diecinueve de mil novecientos sesenta y seis.

El Órgano de instancia, previa comprobación sobre el terreno informa que en ninguna de las fincas afectadas existen prohibiciones o limitaciones de las que, respectivamente se señalan en los artículos veinticinco y veintiséis del mencionado Decreto dos mil seiscientos diecinueve de mil novecientos sesenta y seis.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO:

Artículo único.—A los efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas diez de mil novecientos sesenta y seis, de dieciocho de marzo, y su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto dos mil seiscientos diecinueve de mil novecientos sesenta y seis, de veinte de octubre, se declara urgente la ocupación de terrenos y bienes gravados con la servidumbre de paso impuesta, con el alcance previsto en el artículo cuarto de la Ley citada, para establecimiento de la variación del trazado, entre sus apoyos números cuatro al catorce bis, de la línea de transporte de energía eléctrica, doble circuito, a sesenta y seis KV., de tensión «Sabón-San Pedro de Visma II», que sustituirá al actualmente en servicio, el cual pasará a formar parte de una segunda alimentación directa a «PETROLIBER», desde «Sabón», cuyo expediente se encuentra en tramitación, instalación que ha sido proyectada por la Empresa «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima» (FENOSA).

Los bienes y derechos a los que afecta esta disposición, están situados en el término municipal de Arteijo, de la provincia de La Coruña, y son todos los que figuran en la relación presentada por la Empresa solicitante de los beneficios, que consta en el expediente y que para información pública se insertó, en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña», número doscientos ochenta y nueve, de fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, con la subsanación del error en la titularidad de la finca número cincuenta y seis de la citada relación, que es realmente propiedad de don Francisco Rodríguez Don.

Dado en Palma de Mallorca a veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria y Energía,
IGNACIO BAYON MARINE

29185

REAL DECRETO 2891/1982, de 24 de septiembre, por el que se declara «Zona de protección artesana» a la provincia de Jaén.

El Decreto quinientos cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y seis, de veintiséis de febrero, regulador del Plan de Fomento de la Artesanía, en su artículo once, determina que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, podrá declarar una o varias zonas geográficas como «Zonas de protección artesana», a los efectos previstos en la Ley de Industrias de Interés Preferente y disposiciones que la desarrollan.

La provincia de Jaén mantiene una variada artesanía de gran valor artístico y cultural que además supone el medio de sustento de numerosas familias. No obstante, esta artesanía está en vías de regresión, especialmente debido a su marginación respecto del proceso de desarrollo económico. En el actual momento es poco menos que imposible el levantamiento de la artesanía en esta provincia con sus solos medios, a pesar de que disponga de una amplia tradición y una buena dotación de recursos humanos.

Todo ello justifica la conveniencia de una acción específica de fomento, encaminada a potenciar el desarrollo del sector en la provincia y la reestructuración de las unidades que lo precisen, así como la puesta en marcha de acciones asociativas de todo tipo.

Se destaca el gran interés que puede representar la creación de puestos de trabajo y los bajos costos energéticos que el Sector supone.

Para la tramitación del presente Real Decreto se ha tenido en cuenta el informe emitido por la Consejería de Economía, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, solicitado por este Departamento en virtud de lo dispuesto en el artículo dieciséis como cuatro del Real Decreto mil noventa y uno/mil novecientos ochenta y uno, de veinticuatro de abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios del Estado en materia de Industria y Energía a la Junta de Andalucía.

En virtud de todo lo anterior, de acuerdo con lo que dispone la Ley ciento cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y tres, de dos de diciembre, sobre Industrias de Interés Preferente, y el Decreto dos mil ochocientos cincuenta y tres/mil novecientos sesenta y cuatro, de ocho de septiembre, que desarrolla dicha Ley, y habiendo sido favorablemente informado por la Comisión Nacional de Artesanía, hoy Comisión Interministerial para la Artesanía, a tenor de lo dispuesto en los artículos noveno y undécimo del Real Decreto mil quinientos veinte/mil novecientos ochenta y dos, de dieciocho de junio, sobre Ordenación y Regulación de la Artesanía, a propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y dos,

DISPONGO:

Artículo primero.—A los efectos de lo dispuesto en la Ley ciento cincuenta y dos/mil novecientos sesenta y tres, de dos de diciembre, sobre Industrias de Interés Preferente, se califica «Zona de protección artesana» a la provincia de Jaén.

Artículo segundo.—La vigencia de la calificación a que se refiere el artículo anterior será de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, salvo que el Gobierno acuerde una prórroga para mejor garantizar la consecución de los objetivos previstos por dicha calificación.

Artículo tercero.—La calificación otorgada persigue los siguientes objetivos:

a) Lograr una dimensión media que permita aumentar la productividad por trabajador y consiga un aprovechamiento óptimo de la maquinaria utilizada y demás «inputs» necesarios.

b) Dotar de las instalaciones y medios de producción más convenientes a los establecimientos artesanos, de forma que permita a los titulares de los mismos una mayor selección y tratamiento de las materias primas, la mecanización de las labores auxiliares y complementarias del proceso productivo, así como un almacenaje de los productos elaborados en condiciones óptimas.

c) Mejorar la calidad técnica y artística de los productos elaborados.

d) Potenciar la comercialización de los productos artesanos y/o la utilización de los canales comerciales más adecuados a cada uno de ellos.

e) Mantener y asegurar la pervivencia de una artesanía de tradición y raigambre en la zona.

Artículo cuarto.—El Ministerio de Industria y Energía tomará en consideración, a efectos de conceder los beneficios del presente Real Decreto, toda solicitud de las unidades artesanas establecidas o que se instalen en la zona, siempre que el proyecto incida en el desarrollo artesano de la misma o se trate de ampliación o concentración de unidades existentes, de traslado de talleres inadecuadamente emplazados o de la creación de servicios comunes.

Artículo quinto.—Las Empresas beneficiarias deberán cumplir las siguientes condiciones:

Uno. Técnicas: Las unidades deberán tener la consideración de artesanas, de acuerdo con las normas establecidas en la Sección I del Real Decreto mil quinientos veinte/mil novecientos ochenta y dos, de dieciocho de junio, sobre Ordenación y Regulación de la Artesanía, a tenor de lo dispuesto en el artículo décimo del Real Decreto quinientos cuarenta y nueve/mil novecientos setenta y seis, de veintiséis de febrero, regulador del Plan de Fomento de la Artesanía.

Para tener derecho a los beneficios que puedan concederse, las Empresas deberán estar inscritas en el Registro Artesano, regulado por Orden de diez de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

Dos. Económicas: Deberán tener recursos propios para cubrir, como mínimo, el veinte por ciento de la inversión real proyectada.

Tres. Sociales: Deberán contribuir a la formación y aprendizaje de los oficios artesanos, alentando su dedicación y pervivencia en la zona.

Artículo sexto.—Los beneficios que podrán concederse a las Empresas dentro de la zona de protección artesana son los siguientes:

Primero.—Subvenciones con cargo al Presupuesto del Ministerio de Industria y Energía, que podrán alcanzar hasta el cuarenta por ciento de la inversión real, en inmovilizados fijos, proyectados y aprobados.

Segundo.—Preferencia para la obtención de crédito oficial, en defecto de otras fuentes de financiación.

Tercero.—Obtención de becas para cursos de Formación Empresarial.

Cuarto.—Ayudas para la asistencia a ferias y manifestaciones comerciales, nacionales y extranjeras.

Artículo séptimo.—Los beneficios señalados en el artículo anterior se concederán por un período máximo de cinco años.

Artículo octavo. Uno. Los artesanos o Empresas artesanas que deseen acogerse a los beneficios concedidos en el presente Real Decreto podrán solicitarlo del Ministerio de Industria y Energía en la forma que determine este Departamento.

La iniciación del expediente podrán realizarse tanto en la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Jaén como en los Servicios competentes de la Consejería de Economía, Industria y Energía de la Junta de Andalucía de dicha provincia, la que a su vez dará traslado del mismo a la Dirección Provincial del Ministerio para su envío a la Dirección General de la Pequeña y Mediana Industria.

Dos. La concesión de beneficios, previa calificación de los proyectos, se hará mediante Orden del Ministerio de Industria y Energía, a propuesta de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Industria, previo informe de la Consejería de Economía, Industria y Energía de la Junta de Andalucía.

Tres. Las obligaciones de las Empresas y los procedimientos de inspección, caducidad y renuncia, serán los establecidos en el Decreto dos mil ochocientos cincuenta y cuatro/mil novecientos sesenta y cuatro, de ocho de septiembre, por el que se desarrolla la Ley de Industrias de Interés Preferente.

Artículo noveno.—La Comisión Provincial de Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales tomará las medidas complementarias que considere más adecuadas para un mejor cumplimiento de los objetivos perseguidos por el presente Real Decreto.